

TRANSFORMACIONES EN EL ESTADO Y EN EL SISTEMA POLÍTICO EN LA ARGENTINA DEMOCRÁTICA (1983-1993)

Javier Arzuaga Magnoni

Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública UAEM

Daniel Campione

*Universidad de Buenos Aires – Instituto Nacional de
Administración Pública, Argentina*

En los últimos años, la sociedad argentina ha sufrido una crisis de conjunto, que atraviesa a todos los sectores y niveles. En definitiva, los elementos de una crisis que es tanto económica como político-ideológica, provienen de larga data, en una sociedad que deja de ser hegemónica en la década de los treinta, y en la que se obturan sucesivamente los intentos de dotarla de un comportamiento reproductivo, cualquiera fuera éste. La novedad relativa es la magnitud alcanzada por la condensación de las contradicciones, que la sitúan en una suerte de “caída libre” en casi constante aceleración. Ninguna instancia social se exime de verse atravesada por conflictos, que se agudizan hasta el límite de la desintegración. Clases dominante y dominada, sociedad política y sociedad civil, producción de mercancías y producción ideológica, se debaten al borde del desquiciamiento. En ese cuadro, el Estado y el conjunto del sistema político han pasado a desenvolverse en condiciones de una democracia política, que sobrevive, pese a su potencial vulnerabilidad. Nuestro intento en este trabajo es efectuar algunos aportes a la caracterización de esta coyuntura de crisis, y al señalamiento de sus perspectivas futuras.

En esa dirección, pensamos que la forma de alcanzar una adecuada comprensión del proceso es tratar de ubicarlo en los grandes ejes de las transformaciones “estructurales”. Ello sin descuidar ninguno de los niveles que aportan a la conformación de una intrincada trama de contradicciones.

En nuestro examen, partimos de la consideración del Estado como organizador de los intereses políticos de largo plazo de la burguesía. La característica central de la relación de capital reside en el hecho de que la dominación se encuentra mediada por el intercambio mercantil. El trabajador al no estar sujeto

ni directa ni físicamente al capitalista adquiere una apariencia de libertad que oculta la sujeción real mediada por su cosificación como mercancía. Así, las relaciones sociales “efectivas” revisten la forma de una relación social entre los productos del trabajo (fetichismo de la mercancía). Esa libertad oculta el hecho de la explotación, y produce dos efectos fundamentales: separa al trabajador del control de los medios de producción, y organiza la explotación a partir de la compra-venta libre de la fuerza de trabajo. Este encubrimiento de la explotación produce una abstracción que permite la aparición de “formas distintivas” de la dominación capitalista en lo político y en lo económico. Esas “formas distintivas” se traducen en formas de aparición de la clase dominada ante cada una de estas esferas: como ciudadano y como trabajador. Por la primera, la desigualdad inherente a la relación capitalista se ve “metamorfoseada” en la forma fantástica de la igualdad. El proceso de separación-procesamiento de la actividad social en una esfera política separada de la económica y de las relaciones sociales en categorías políticas particularizadas (trabajador-ciudadano)-, constituye una lucha permanente por desactivar la organización clasista, lo cual es esencial para garantizar la reproducción del capital. La separación, históricamente determinada, entre economía y política genera la ilusión de la autonomía del Estado. Así, la autonomía del Estado es un aspecto del fetichismo de la mercancía, el Estado oculta la relación de capital, diluye la lucha de clases, atomiza las clases sociales y fragmenta la conciencia de clase. La forma fetichizada del Estado autónomo, es, por tanto, una necesidad del capital. Tras esta imagen fetichizada, el Estado busca instaurar y mantener la producción generalizada de mercancías. Lo que, a su vez, resulta de, refuerza y reproduce las relaciones sociales capitalistas creadas por dicha producción de mercancías (1).

En ese sentido, es evidente que el Estado argentino se encuentra en problemas en los últimos años. De 1976 en adelante, el Estado argentino aparece “capturado” por capitalistas particulares, que obturan la posibilidad de fetichizar las relaciones de clase y presentan al Estado como un aparato que al perder su imagen de neutralidad respecto de las clases sociales en pugna se manifiesta contrario a los intereses generales.

Con la vuelta a la forma de Estado democrática en 1983, se abre una problemática nueva. Se trata de compatibilizar los intereses de la clase dominante (2), que presentaba importantes novedades en su conformación, con la vigencia de las libertades públicas y el sometimiento periódico a la opinión del electorado. Desde el inicio, la direccionalidad impuesta al proceso de reconversión capitalista, la búsqueda de una nueva inserción en el mercado mundial, y la deuda externa, ya en vías de convertirse en un condicionante

perpetuo, definen nuevas relaciones de fuerza. Esto es aplicable tanto al conjunto de la sociedad, como en el interior de los distintos sectores de la clase dominante. En el primer aspecto, se da un proceso de concentración y centralización del capital, realizado en condiciones de pérdida de toda capacidad de crecimiento de la economía.

En el período de transformaciones que va desde 1976 a la actualidad, un núcleo de gran capital monopólico de origen local se destaca como beneficiario mayor, si no exclusivo de todo el proceso. Este resulta el sector hegemónico dentro de la clase dominante, asociado a una ente de sujetos externos (organismos internacionales, banca acreedora, etc.) fortalecidos en torno al problema de la deuda. Los intereses de ambos sectores, el local y el externo son sólo parcialmente compatibles, lo que vuelve altamente inestable la alianza.

Para el conjunto de la sociedad, el problema fundamental era y es poner de acuerdo la referida dirección concentrada ora y cada vez más excluyente para el conjunto de la sociedad, con la vigencia de las libertades democráticas. El Estado se encuentra en una situación en que debe redefinir funciones. Redefinición en un sentido desfavorable para la realización de cualquier política de reformas redistribucionistas. Ello lo diferencia de los períodos constitucionales anteriores en los que se habían aplicado, casi siempre, orientaciones de ese tipo. Hacia la ocupación definitiva de ese Estado, en un proceso de publicitación, tiende un nuevo poder económico que se reclama como poder político directo y como sostenedor efectivo de ese Estado.

En síntesis, se ha iniciado un proceso de pérdida de la capacidad de regulación efectiva por parte del Estado (nos referimos con esto a la totalidad de las formas, redes, y normas institucionalizadas, implícitas y explícitas, que aseguran la compatibilidad de actitudes dentro de un régimen de acumulación). Ello va a producir un sistema político frágil, con una débil posibilidad de legitimación.

La dictadura militar (1976-1983) ha resuelto tareas históricas, si lo vemos desde el ángulo del núcleo más concentrado de la clase dominante. Estas se inscriben tanto en el terreno económico, como en el político y en el ideológico. Creemos acertado afirmar que lo que se produce es una remodelación del conjunto de la sociedad argentina, de repercusiones amplísimas (3). Acompañando a los cambios del régimen de acumulación, la política económica y la represiva se conjugan para desarmar al rival principal del gran capital. A saber: reconversión industrial que dispersa a la clase obrera, y crea divisiones económicas y funcionales nuevas en su interior. Ello produce un debilitamiento político-ideológico de por sí, pero éste se refuerza con una represión brutal que aniquila a los cuadros intermedios del movimiento obrero y organizacio-

nes populares (los más difíciles de reemplazar). Esto será completado por un operativo ideológico tendiente a desprestigiar toda confrontación con el poder. Las luchas sociales son presentadas desde el poder como ineficaces, en tanto se impide que produzcan resultados ventajosos para los; luchadores. Ya la vez en peligrosas, por cuanto el poder está dispuesto a castigar con rigor a quiénes las emprenden. Se instala en los sectores populares la asociación, vista como inmodificable, entre lucha-derrota-castigo, y ese castigo posible se esconde en un amplio arco, desde la represalia laboral, hasta la supresión física.

El cuadro resultante es de desmantelamiento social, político e ideológico de las fuerzas de clase capacitadas, actual o potencialmente, para cuestionar al capitalismo (o, por lo menos a su diseño actual). Esto es de una amplitud y profundidad tal que puede hablarse de derrota estratégica de las clases subalternas.

En ese paisaje es que se va a producir la apertura democrática. La constelación triunfante, Parte de una correlación de fuerzas muy favorable. Puede, por lo tanto, lanzarse en condiciones ventajosas a la conquista del Estado democrático. Luego del final de la dictadura, se reacondicionó a la democracia, mediante un discurso que la desvincula del periodo anterior, del que fue responsable y beneficiaria. La dictadura tenderá a ser reinterpretada desde la ideología oficial como una pesadilla efectuada bajo una conducción exclusivamente militar, finiquitada en el desastre de Malvinas. Las Fuerzas Armadas de la democracia quedan, en consecuencia, fuertemente debilitadas en su capacidad de acción política, no presentan una alternativa viable a las formas democráticas (4). Pero la gran novedad será que la clase dominante, y los sectores externos aspirarán a una imbricación de cierta permanencia con un sistema político democrático. El virtual régimen político conformado por la alternancia cívico-militar queda clausurado de hecho en 1983. Lo reemplaza una reflexiva apuesta a las flexibles condiciones de una democracia política. Apuesta que se realiza a partir de la certeza de poder ejercer un amplio control sobre los "límites" de dicho sistema político, y que en gran medida fuera asegurado por el ciclo previo de dictadura la militar (5).

La coyuntura nacional, regional e internacional, ofrecía las condiciones para el cumplimiento de dos tareas básicas que contemplaran en toda su extensión los intereses fundamentales de la clase dominante:

- 1) Proseguir con la reformulación del Estado al servicio de los intereses exclusivos del gran capital, en una continuidad con la dictadura, pero con modalidades nuevas: planteada la crisis de la deuda, el Estado debía encontrar una modalidad contractiva, de "achicamiento" para refuncionalizarse en relación a los intereses del gran capital local e internacional. La etapa previa había sido, contra lo expuesto en el discurso durante la era Mar-

tínez de Hoz -primer ministro de economía de la dictadura militar-, de expansión del aparato estatal.

- 2) La conformación de un sistema político estable, plegado hacia la derecha, que asimilara o neutralizara toda política de alternativa a la propugnada por la clase dominante. Para ello, era indispensable superar la relativa inorganicidad de los partidos mayoritarios respecto a sus organizaciones políticas. El gran capital se plantea así la conducción directa de las políticas estatales.

La etapa que va desde 1983 -con la instauración de la democracia- al presente, puede ser leída, por lo tanto, en función de la realización de estas dos tareas. Ella se ve plagada de retrocesos y desviaciones, pero la resultante global es un importante avance hacia su cumplimiento. Cabe destacar que la realización de estas dos tareas se encuentra ampliamente enmarcada en los profundos cambios que se registran a nivel internacional. Sin querer presentar la crisis de la Argentina actual como mero “episodio local” de una reformulación a escala mundial de estructuras políticas, económicas e ideológicas, nos parece evidente que la reorganización capitalista en Argentina no puede verse sólo en referencia a las limitantes internas impuestas por el agotamiento del “modelo de industrialización por sustitución de importaciones”, sino también en relación con los cambios en la configuración global del capital signado por la crisis del fordismo y la monetarización consecuente del capital que favoreció una particular constitución de proceso de acumulación (4).

I. Clase dominante, estado y sistema político

Las políticas de la dictadura reforzaron el lugar dentro de la clase dominante de dos núcleos diferenciados: a) El gran capital diversificado local, beneficiario de un proceso de concentración y centralización logrado en base a subsidios, contratos con el Estado, endeudamiento privado luego estatizado, etc. A esa “asistencia” estatal directa, se sumaron una serie de mecanismos que lo beneficiaron en la tarea de barrer a los competidores menores (apertura económica, manejo del tipo de cambio, política financiera y crediticia). Un lugar central en este proceso lo ocuparon las posibilidades brindadas por la dictadura de reducir personal y salarios, reorientando la producción y reorganizando sobre nuevas bases las unidades económicas. b) Los sectores del capital financiero internacional, ligados a la deuda externa contraída en esos años. Su posición acreedora los dotó de una capacidad inusitada de presión e intervención privilegiada en el diseño de políticas. De 1976 en adelante, se efectuó un virtual reemplazo en el seno de lo que Tilman Evers llamaría sectores externos de la clase domi-

nante (5). Mientras el capital trasnacional invertido en la industria sufría más bien retrocesos (algunas importantes multinacionales se retiraron del mercado argentino fundamentalmente durante la dictadura militar), la deuda y subsidiariamente, otros manejos financieros, colocan a la banca acreedora, a los organismos financieros internacionales, y al propio gobierno norteamericano en un inusitado lugar de preeminencia.

De diferentes maneras, ambos sectores estarán destinados a compartir amplios espacios en la dirección del aparato estatal de la democracia. Sus contradicciones secundarias tendrán un papel protagónico, pese a la existencia de un acuerdo general en el rumbo estratégico. Estas contradicciones dirimirán espacios en la política económica, y en la conformación y funcionamiento del aparato estatal, es decir, ese conjunto de acciones conocidas como el “ajuste”. En las tareas pertenecientes al campo más específicamente político e ideológico ha existido menos ocasión de manifestar diferencias tácticas, y un mayor grado de acuerdo. La conformación de un sistema político, la ampliación del espacio ideológico de la derecha, la instalación de un “sentido común” compatible con las orientaciones del nuevo régimen de acumulación, siguen un rumbo exento de grandes discrepancias.

En ese sentido, los problemas y las divergencias emergen desde el plano económico. En efecto, la Argentina de los ochenta es un país en recesión permanente. Los efectos de ésta son ampliados y complejizados por una inflación elevada y persistente. El desarrollo del capitalismo argentino ha quedado convertido en un juego de suma cero, en el que la reproducción ampliada del capital-incluso en el corto plazo- se encuentra atada a la expropiación de otros sectores. No sólo se vuelven inviables las políticas del Estado de Bienestar, sino que cualquier concesión duradera a las clases subalternas queda reducida a su mínima expresión. Allí nace una suerte de “ilegitimidad” sustancial del sistema social de la Argentina reciente, que no puede encontrar sutura en el plano político-ideológico. El núcleo de la clase dominante se ve llevado a hacer prevalecer sus intereses hasta el límite de lo económico-corporativo, y por lo tanto, incapacitado de ejercer dirección. Su base consensual queda reducida casi a los mismos límites de ese núcleo y a quiénes participan más o menos directamente de beneficios de la corrupción y el clientelismo.

Entretanto, el resto de la sociedad resulta económicamente perjudicada, tanto en un plano inmediato como de sus expectativas futuras de movilidad social. Degradación social y marginación política conforman su horizonte inmediato. Sin embargo, la previa eficacia alcanzada en la supresión de alternativas, permite reproducir su pasividad política. Se desarrollan mecanismos de dominación ideológica orientados a generar un consenso negativo.

Esto es, que la sociedad renuncia a impulsos de rebeldía por temor a sufrir perjuicios aún mayores. Quizás poco ambiciosos en sus alcances, al renunciar de antemano a un consenso activo, estos mecanismos resultan muy efectivos.

En esas condiciones, el retorno a la institucionalidad democrática queda signada por un desplazamiento entre Estado y sociedad civil, en el que la legitimidad del orden político ve estrechada su base social. El sistema político presenta una eficacia disminuida, con dos series de efectos: hacia las clases dominantes, la prescindencia de mediaciones, con búsqueda de inserciones directas en el aparato estatal. El gran capital ingresa a la actuación política pública, sin referencias económico-corporativas, o muy tenues (capitanes de la industria, club de exportadores, etc), convirtiéndose en un actor político informal. Con ello tiende a vehiculizar esa inserción en el aparato estatal, con prescindencia de las organizaciones formales (como las tradicionales Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural Argentina, entre otras.).

En lo que respecta a la clase dominada, todo el accionar del aparato estatal tiende a instalar una progresiva marginación. No se realiza ningún intento de promover la participación en las decisiones políticas de sectores populares amplios. Cualquier movilización en sentido de apoyo a las políticas estatales, se vuelve inviable, dado el carácter excluyente de las políticas llevadas a cabo. El único elemento de participación pasa a ser el voto, pero éste se restringe en su eficacia al perder correspondencia las opciones electorales con las políticas gubernamentales que luego se llevan a cabo. Los partidos mayoritarios (la Unión Cívica Radical -UCR- y el Partido Justicialista -PJ-) retornan a la dirección del aparato estatal, en un cuadro que los priva de la posibilidad de llevar a cabo sus políticas tradicionales, de orientación genéricamente redistributiva. Se crea así una contradicción irresoluble entre el origen de sus votantes y el contenido de las políticas a sostener. Los dos partidos mayoritarios aceptan como infranqueable un límite: los intereses globales del capital monopolístico. Este límite se constituye a la vez en valla para mantener un vínculo consensual exitoso con su base social, dado el marco de muy severas restricciones en que un sistema de este tipo debe operar, en los años ochenta y noventa.

En los primeros años de la democracia, el alfonsinismo (7) se plantea intentar una sutura de las contradicciones en el nivel específicamente político, plano en el que se pretende constituir una etapa de carácter fundacional (los “100 años de democracia”). Insertado en un partido de capas medias, que tiene a la vigencia de la democracia política como reivindicación central, el alfonsinismo desplegó una serie de iniciativas para las que se reclama una importancia estratégica (II República, Reforma Constitucional, Traslado de la Capital, Ética de la Solidaridad). Estas iniciativas se mantuvieron en el plano

discursivo, mientras la agudización de las condiciones de la crisis era la única verdad palpable para los trabajadores. En ese cuadro, se abrirá paso una concepción restringida de la acción política, que impregnará de ahí en adelante a todo el sistema político.

El acotamiento del espacio público, la renuncia a generar una capacidad hegemónica, lleva a privilegiar los vínculos entre la clase dominante y las élites políticas, que tienden a seleccionarse en vista a esas consideraciones. El espacio callejero languidece como escenario de los acontecimientos políticos, mientras que los medios electrónicos ganan protagonismo para teatralizar un debate en el que el conjunto de la sociedad queda remitida a espectadora. En el interior de las organizaciones políticas, el militante político tiende a ser reemplazado por el “operador” y el funcionario. La actividad política se confina al interior del aparato estatal, y revierte en “funcionariado público”. Y eso sucede en un Estado que desde el ángulo de los sectores populares no puede ser visto sino como ineficaz, lejano a sus intereses. Lo que sobrevive es la administración, jalonada por periódicas elecciones y sus permanentes pasos preparatorios. En síntesis el Estado divide sus preocupaciones entre la gestión de los intereses de la clase dominante, y el mantenimiento en la pasividad de los dominados.

Los dirigentes políticos comienzan a organizarse, cada vez más, como camarillas restringidas sin vínculos orgánicos con ningún sector social importante -con excepción hecha del empresariado-. El Estado de atonía generado en los sectores dominados por las políticas de la dictadura, se convierte en un reaseguro del sistema. Esa atonía, combinada con la perpetuación de la crisis, genera resignación, producto de la carencia de alternativas organizadas y con presencia.

Las tendencias reseñadas se acentuarán en la segunda etapa de la restauración democrática con el menemismo. Se produce un debilitamiento de los mecanismos de legitimación lanzados desde el plano político los que no corresponden a las tradiciones del peronismo. La coyuntura hipercrítica desatada por los grandes grupos económicos en febrero de 1989 (8), es convertida por el menemismo en una lección a asimilar con carácter definitivo. En respuesta a la virtual ingobernabilidad generada por la creciente agudización de la crisis, opta por el viraje decidido: la adopción plena de políticas acordes con la más inmediata realización de los intereses del núcleo hegemónico dentro de la clase dominante. La “economía popular de mercado” será el slogan rector, en una leve variación de una divisa liberal. Se intenta así forjar nuevas alianzas políticas, que sancionen plenamente los cambios estructurales ocurridos, y fijen los caminos para continuar con la transformación. Estas alianzas se van a revelar a su vez sumamente inestables. La crisis prosigue con una dinámica

que descompone al sistema político. Licuadas las identidades preexistentes de los partidos, que tenían desde siempre rasgos de debilidad, las divisiones transcurren por el interior de las organizaciones partidarias sin generar por eso un reagrupamiento. El desprestigio por ineficacia y su desvinculación de la sociedad civil alcanza al conjunto de las fuerzas políticas. Su incapacidad para resolver necesidades populares es imposible de disimular. Aún los pequeños partidos que se sitúan en posturas de radicalizada oposición, se ven inmersos en la pérdida de sus apoyos, de por sí reducidos.

En cuanto a sus acciones concretas, el menemismo cuenta con un nivel de acuerdo social importante para las privatizaciones. Pero ese consenso puntual se licúa progresivamente a medida que las empresas del Estado se transfieren efectivamente, dado que queda al descubierto un escenario en el que acreedores y grupos económicos se benefician de las privatizaciones, sin una contrapartida visible. Los servicios privatizados se encarecen sin mejorar rápidamente. Y el aparato estatal no gana en eficacia, sino al contrario, en los presentados como sus quehaceres específicos (salud, educación, justicia, etc.) por el discurso ideológico dominante. Los sucesivos fracasos de la gestión del Estado, llevan a que la suerte de la Argentina sea leída por el conjunto de la sociedad con un enfoque apocalíptico. En una situación social que parece condenada a bordear la catástrofe, las creencias colectivas que tuvieron arraigo por décadas, se descomponen irreversiblemente. Las posibilidades inagotables de la Argentina, su riqueza incomparable, las posibilidades de ascenso social, pierden toda su eficacia como creencias legitimadoras. Tiende a revelarse, más bien, el agotamiento de las posibilidades de esa mitología, en tanto ya no puede mantener un sentido común no cuestionador.

II. Los partidos políticos y su rol.

A partir de 1983, la conformación del sistema de partidos tiende a un diseño con importantes rasgos de bipartidismo, pero complejidades muy dignas de señalamiento. Como tendencia general en lo ideológico, se produce un corrimiento general hacia la derecha de los dos partidos mayoritarios. Imposibilitados de realizar sus políticas tradicionales de corte redistribucionista, su ideología tiende a converger con sus acciones concretas, de orientación neoliberal. Ni la sociedad civil ni el Estado son en absoluto los mismos que anteriormente habían gobernado. Esta derechización se manifiesta como una progresiva adopción del marco ideológico propuesto y difundido por el gran capital.

El primer tramo de adaptación ideológica de los partidos es más bien negativo. Consiste en el abandono gradual de cualquier aspiración de confrontar, siquiera parcialmente, con los intereses del bloque de clases dominantes. La aceptación de la concentración capitalista, el pleno imperio de la propiedad privada, y la renuncia a posiciones de ruptura en el plano internacional, ya tienen un avanzado grado de asimilación en la propia campaña electoral de 1983.

A medida que avanza el gobierno de Alfonsín, y claudican los primeros arrestos de mantenerse en la línea tradicional del partido, esta adaptación se profundiza en el radicalismo. Va tomando forma una alianza privilegiada con los grandes grupos económicos, que se formalizara en los años 85-86. Esta rebasa, sin embargo, los límites del acatamiento a las condiciones emergentes de la dictadura. Se trata, en la última etapa alfonsinista, de pasar al trabajo activo en el mantenimiento y acentuación de las mismas. Y así, el primer paso de marcación de límites va a ir dejando lugar a la incorporación de contenidos positivos. Se adoptan las políticas pergeñadas por los ideólogos del gran capital, y algo más lentamente, también las justificaciones ideológicas que sirven para fundamentarlas. El propio lenguaje del alfonsinismo avanza en ese sentido, mutando en un discurso tecnocratizante. Concretamente el neoliberalismo, apenas modificado, comienza a imponerse en las acciones concretas, en lo programático y en el plano discursivo. Esto reconoce distintos ritmos e intensidades en el gobierno y la oposición, pero sin divergencias de fondo.

El gobierno de Menem acelerará esa lógica, al producir una identificación absoluta con el neoliberalismo. Ello implicará la renuncia, casi explícita, a cualquier entronque con una tradición reformista y populista. Se traspasan, consciente e incondicionadamente, vallas que el alfonsinismo no se había atrevido a derribar. Utiliza formas tradicionales para el peronismo para maniobrar con una amplitud que el radicalismo nunca alcanzo. Desde el comienzo de su ascenso político, Menem se sitúa por fuera de la política, y tiende a desplazar a la conducción de su partido. Una vez situado en la presidencia, ese desplazamiento de la conducción del peronismo, se traduce en un virtual cogobierno con buena parte del personal permanente de la derecha. Alsogaray, Alemann, Krieger Vasena, todos ellos figuras preponderantes en las distintas dictaduras militares desde 1955, serán “compañeros de ruta” de la nueva orientación. Junto a ellos, los representantes del nuevo poder económico, convertidos desde antes en personajes públicos, y ahora en funcionarios del gobierno.

Menem margina al juego partidario, y sigue la lógica de una vinculación cada vez más fuerte con los grandes grupos económicos. En el comienzo mismo de su gestión, se produce un nuevo punto de inflexión en la

“publicitación” del poder económico, al entregar a uno de los principales grupos económicos el ministerio de Economía. En efecto, creemos que el experimento Bunge y Born (9), si bien sigue la lógica tendencial del proceso, interpreta de manera excesivamente gruesa sus líneas. En su posición de recién llegados a una política de subordinación estrecha al gran capital, los dirigentes del menemismo, no perciben los límites que tiene la relación entre el Estado y el capital. Estos inviabilizan la entronización explícita del capital en un sector sustantivo del Estado, como es el Ministerio de Economía. En efecto, lo que se produce en un caso como el del ministerio Roig-Rapanelli, es una anulación de las mediaciones que suponen la separación del Estado del resto de la sociedad. Lo mismo ocurre con la capacidad de legitimación de las políticas, ya que es muy difícil cubrir esta captura explícita del aparato estatal bajo el manto del interés general. Más llamativa resulta la actitud de la empresa Bunge y Born, que parece obrar creyendo en su posibilidad de dirigir el conjunto de la economía argentina, dado la antigua conformación de ese grupo, y el rol predominante que jugó por décadas. Aquí es dable reflexionar sobre cierto primitivismo en la concepción de parte de la gran burguesía argentina. Bunge y Born y el núcleo de capitalistas que lo apoyó, reveló una falta de comprensión de la complejidad del Estado capitalista, sobre todo cuando asume formas de democracia política. El yerro no consiste en el nombramiento directo de un alto ejecutivo de empresas de primera línea. El problema es hacer de esto una suerte de representación oficial, en el que el plan económico es “propiedad” de un grupo de empresas.

Más allá del significado de este comienzo, lo que quedará firme, es la realización de una resuelta política de subordinación al gran capital. Lo que vendrá después, serán ajustes en un sentido de perfeccionamiento de esa relación, hasta llegar al ministerio Cavallo y al Plan de Convertibilidad. En función de esa supeditación, las grandes líneas de las políticas públicas quedan marcadas con carácter definitivo:

- a) Reestructuración del Estado basada en las privatizaciones, que alcanza una magnitud mayor a lo siquiera planeado con anterioridad.
- b) Abandono sistemático y completo de todo remanente nacionalista y populista en la orientación política, retirando al Estado de tradicionales funciones de protección social. Entre ellas destacan la privatización del sistema provisional, o la transferencia a las provincias de la prestación de servicios públicos (como, por ejemplo, la educación), o el abandono directo de las actividades.

- c) Supresión de todas las trabas existentes para la acumulación capitalista y la regulación por los patrones del proceso laboral, proceso generalmente designado como “desregulación”.

El advenimiento de Cavallo significará un modo de inserción más equilibrado, menos directo y exclusivista que el plan Bunge y Born. El reservorio intelectual de la nueva conducción económica, la Fundación Mediterránea, presenta una estructura y funcionamiento digna de señalarse. Sus estrechos vínculos con el gran empresariado son claros y eficaces. Sin embargo, existen los recaudos para preservar un grado importante de diferenciación. Y ese margen le permite elaborar diagnósticos y políticas no sometidos enteramente a los intereses particulares de las empresas. Se genera así un núcleo duro, de sesgo claramente tecnocrático, que pivotea con perfil propio, entre las presiones de los organismos financieros internacionales, el gran capital local, y los demás actores del proceso (10).

En lo que respecta al sistema político, salta a la vista una constante: el casi completo alejamiento del partido oficial respecto a la conducción económica del Estado, y la disminución de su papel, en la conducción gubernamental en general. Esta tendencia de mediatización de la estructura partidaria gobernante, tuvo su origen, como dijimos, en el periodo Alfonsín, pero ahora se profundiza y amplía. Menem intenta la fundación de un nuevo orden político. A partir de sus heterodoxas alianzas al nivel de la dirigencia, y en el interés de procurarse un amplio apoyo de masas, Menem persigue una autonomía creciente respecto del PJ y la formación de una nueva coalición. Se piensa que ello le permitirá superar los vínculos con el peronismo, aún en el plano discursivo. Esta “fundación”, queda a mitad de camino, debido a los sucesivos inconvenientes que se presentan a lo largo de su gestión, y a la urgencia electoral que fuerza a recurrir nuevamente al Partido justicialista. Sin embargo, tampoco en este caso, los tropiezos inhiben la persistencia en la línea general de acción. El PJ queda condenado a instrumento electoral, sin movilización y con escasas militancia cotidiana.

En el sistema político, quedan dibujados dos espacios de menor envergadura, a derecha e izquierda del bipartidismo mayoritario. Por derecha, el liberalismo clásico (la Unión del Centro Democrático -UCD-) que obra como una especie de polo de atracción ideológica. En efecto, frente a la adopción de políticas cada vez más próximas al neoliberalismo, la UCD juega como efecto de corrección, a partir de propuestas más radicalizadas, más “puras” dentro de la línea neoliberal. Ellas operan como indicador del camino que les falta recorrer a los dos grandes partidos en su “reconversión” ideológica. Más allá de sus potencialidades casi nulas para constituirse en algún momento

en partido de gobierno, la UCD encuentra en esta acción de “arrastre” una eficacia inmediata, con proyección de largo plazo. En los últimos tiempos, la inusitada profundidad del viraje menemista, ha sido un “triunfo intelectual” del neoliberalismo.

A la izquierda, con una conformación mucho más inestable, hay sectores que aspiran a constituirse en una izquierda sistémica. Sus propuestas no son otras, en general, que la asunción del programa reformista, ya inviable, que en décadas anteriores asumían los partidos mayoritarios. Con incapacidad práctica para formular alternativas reales, sus objetivos proclamados parecen requerir una restauración del Estado de bienestar, cuya imposibilidad no acababan de comprender. La percepción cada vez más generalizada de su inviabilidad, se toma útil para el sistema. Obra como demostración indirecta de la supuesta imposibilidad de articular propuestas diferentes. Eso facilita la ubicación de los partidos mayoritarios en el cómodo sitio de la modernidad frente a los nostálgicos de un pasado irrecuperable.

En relación con los nuevos parámetros ideológicos, el sistema de partidos tiende a sufrir una reformulación estructural que modifica sus bases organizativas y de actuación pública. El carácter de las políticas que se realizan desde el Estado, y aún el estilo de oposición que se hace, imponen una lógica de alejamiento de todo aquello que implique movilización de masas. El contacto dirigentes/bases tiende a ser mediatizado al máximo, hasta el límite de su desaparición. En un comportamiento político signado por la vinculación cada vez más estrecha y exclusiva con el reducido núcleo hegemónico del bloque en el poder, los liderazgos tienden a constituirse sobre nuevas exigencias. Ellas tienen cada vez menos que ver con la adhesión de las bases sociales a la dirigencia. La figura más característica de esa nueva forma de hacer política será el “operador”, cabal creación de la etapa actual.

El “operador” suele no ocupar cargos en la estructura partidaria, y de hacerlo, éstos no tienen por qué corresponderse con su jerarquía real. Sus puntos de apoyo son tres; la relación privilegiada con la jefatura estatal y/o partidaria, la ligazón con el poder económico y el acceso a los medios de comunicación, acompañado de un manejo más o menos hábil en ese ámbito. Ello suele ir acompañado por la participación en ligas clientelísticas al interior de los gobiernos que actúan como “constelaciones de poder” sin referencias ideológicas.

El poder alcanzado se redistribuye en grupos reducidos, que a su vez se prolongan en suboperadores, voceros y otros ejemplares del género. Lo llamativo es que nada, o casi nada, vincula al operador con la sociedad civil, salvo periódicas apariciones en los medios, muchas veces más relacionadas

con la imposición de una imagen de posesión de poder y riqueza, que con apelaciones políticas tradicionales. En un planteo ético bastante heterodoxo, este tipo de políticos suelen hacer ostentación de su cooptación por el establishment, y de los beneficios sociales y materiales que ello trae aparejado.

Por otra parte, ambos partidos mayoritarios tienden a homogeneizarse en una conformación basada en un grado aceptable de democracia interna, resuelta en la elección por sufragio de sus conducciones. Las discrepancias intrapartidarias tienden a parlamentarizarse. Esta reorganización apunta a poner en movimiento y reforzar la reconfiguración ideológica, a cuyo servicio se encuentra.

III. Los Actores sociales en política.

a) El empresariado

El gran capital va a intentar, como ya dijimos, capitalizar en democracia la acumulación económica y política conseguida durante la dictadura. Para ello, van a ser remitidos a un lugar subordinado los agrupamientos institucionales, para tender a conformar un núcleo más flexible y eficaz para la defensa de sus intereses. A partir de 1983, los grupos económicos diversificados de capital local van a organizarse políticamente, no sólo para influir sobre el aparato estatal, sino para convertirse en un sujeto público, que actúe al interior del Estado.

Lo notable es la prescindencia de mediaciones: por un lado se anula, como se señaló, la mediación corporativa, por el otro las mediaciones políticas, ya que se actúa públicamente, sin encuadramientos partidarios, ni lealtades ideológicas genéricas. Livio Kühl, uno de sus ideólogos, resume las razones de esta prescindencia:

“Los intereses importantes necesitan tener una coordinación más rápida que la que ofrecen las instituciones,... a más representatividad, menos agilidad”. (11).

El Grupo de los 9 abre la marcha en 1983, e irá transformándose en una serie de núcleos siempre informales, pero con una conformación clara: los directivos máximos de buena parte de los principales grupos empresarios (grupo Las Marías, Capitanes de la Industria, Grupo Empresario Asesor, entre otros).

Su rasgo en común es ligarse cada vez más estrechamente al aparato estatal, sin la intermediación de ningún representante. En 1986 este proceso alcanza un hito nuevo, al ser incorporados algunos de sus integrantes principales a la dirección máxima de las empresas públicas (Directorio de Empresas Públicas). No es para nada casual que el inicio de su actuación más abierta sea marzo de 1985, es decir la víspera del Plan Austral (12), con lo que significaba éste para la continuidad del proceso de reconversión.

Esta virtual colonización del Estado reconocerá altibajos, pero ya no desaparece a lo largo del período. Por el contrario, la tendencia general los llevará a ocupar lugares cada vez más destacados y públicos. Menem llevará esta tendencia a su exageración en la época del plan Bunge y Born. En su culminación, algunos de los representantes de estos grupos tienden a hacer desaparecer virtualmente la acción estatal como tal, a subrogarla. En algunas de las privatizaciones, la representación del Estado se confunde con la de los grupos interesados en el negocio, en una lógica de recíproca privatización-publicitación que parece no encontrar límite alguno.

El núcleo conocido como “capitanes de la industria”, cuya actuación pública comenzó bajo el rótulo de grupo de los 9, prevé y acompaña la democratización como una suerte de partido informal de lo más granado del capital monopolístico beneficiario de la política de la dictadura, que busca cómo actuar en un marco estatal democrático, cuya permanencia acepta y promueve. La mediación institucional pasa a segundo plano, y un núcleo selecto del gran capital queda instalado en el interior del aparato del Estado. Por primera vez en la historia argentina, gobiernos de los partidos mayoritarios y el gran capital comparten el aparato estatal con tal amplitud y claridad. En efecto, la actuación de los “capitanes” es una negación de todo principio de representación. Ellos no declaran más legitimidad que la de la gran masa de capital que poseen, buena parte de la misma situada en sectores estratégicos de la economía.

Las mediaciones institucionales dentro de la clase dominante no desaparecen, por supuesto, conservan sus esferas de actuación. Pero los protagonistas de la fusión del gran capital y el aparato gubernamental y partidario en condiciones de democracia burguesa, son ese selecto grupo, con muy bajo grado de formalización, que nuclea a lo más concentrado y diversificado del gran capital.

b) Los sindicatos

En este ámbito se verifican fenómenos que reconocen paralelismos con los de otras áreas, sobre todo con la conformación de los empresarios. En efecto, se forma un núcleo extrainstitucional, que apuntará a superar los procedimientos de integración del tipo negociación-movilización, para instalarse resueltamente en una vinculación orgánica con el gran capital. Coinciden en su estrategia el completo abandono de la movilización y el conflicto, con la tendencia a incorporarse al aparato estatal. Esto último no se hace en forma aislada, sino en conjunción con los grupos empresarios, y con objetivos que exceden largamente la defensa de los intereses económico-corporativos. La

orientación última, es lograr una participación permanente en el trazado de la política general del Estado.

Amén de su autonomía frente a la CGT, otra característica es la desvinculación de las bases, salvo en los aspectos más mutualistas. Ello se toma posible por la posesión de estructuras clientelísticas interior de los gremios, que en muchas ocasiones alcanza inusual amplitud. Este grupo dejará al tiempo de existir como tal, pero la tendencia que representa pasará a tener un lugar casi permanente en el aparato de Estado, afianzado en el gobierno de Menem.

En realidad, este proceso es de alguna manera la culminación de un manejo de “gran empresa” para los sindicatos importantes, completado por la adopción desembozada de los presupuestos ideológicos sustentados por el capital, y una nueva forma de actuación en lo específico sindical. Su orientación política central ha sido la de un apoyo pleno en el dictado de soluciones para la reorganización de la vida laboral, de acuerdo con las exigencias del reajuste capitalista. Así se explica el apoyo dado a las diferentes medidas de “flexibilización laboral”. En el terreno de las privatizaciones, la posición de estos grupos ha tendido a ubicarse como partícipes en el proceso, transformándose en empresarios. Los casos de ferroviarios, lucifuercistas, y el sindicato de Obras Sanitarias han sido los más claros en cuanto a posicionarse como partícipes en la propiedad de las empresas privatizadas.

En cuanto al comportamiento de su liderazgo, parte de esta dirigencia sindical tiende a constituirse en parte integrante de la burocracia permanente del Estado. Ello se alcanza por un sesgo “modernizante” de adopción consciente de la línea “gerencial-empresarial” de conducción, que en los últimos años viene impregnado a todas las dirigencias públicas.

La actuación de este grupo, creemos, constituye la línea “modernizadora” dentro del movimiento obrero. Otros sectores del gremialismo tradicional han tendido a moverse dentro de los antiguos parámetros de movilización/negociación, intentando una asociación más externa con el Estado, con mayor grado de autonomía. Este camino está condenado ab initio, por la caducidad práctica de las políticas estatales de “colaboración de clases” que le dieron origen con el primer peronismo, y lo relanzaron en la década de los sesenta. De todas maneras, la línea modernizante no ha logrado consolidar una hegemonía dentro del sindicalismo tradicional, en función de los deletéreos resultados del ajuste para sus representados.

En otro sentido, una novedad fundamental para el movimiento sindical es la inclusión en él, con un peso cuantitativo -y sobre todo político- importante, de sectores de capas medias asalariadas. Estos sectores han aportado gran parte de la conflictividad laboral de los últimos años; Ha abarcado in-

cluso a niveles jerárquicos y profesionales, que han trocado comportamientos más tradicionales por una interpelación al Estado a partir de su inserción laboral y su carácter de asalariados. El sector de las empresas públicas y la Administración ha sido una importante fuente en la aparición de corrientes sindicales combativas y aún clasistas.

c) Intelectuales y aparatos ideológicos

En los últimos años se ha asistido a una reconfiguración de los aparatos ideológicos. Tiende a resolverse en la formación de algo que puede llamarse un “nuevo bloque ideológico”. Este ha tomado resueltamente la dirección en la producción y difusión del pensamiento de los sectores hegemónicos de la clase dominante.

Un primer rasgo de ese proceso ha sido la acentuada “privatización” del conjunto de los aparatos ideológicos. Ello abarca tanto el traspaso a manos privadas en sentido estricto (13), como la pérdida de espacio de organismos de carácter público frente a los privados. El primer caso atañe a radios y canales de televisión, que han sido concedidos a particulares con el resultado de la formación de grupos informativos que reproducen la reestructuración general del capitalismo argentino. El segundo a las instituciones educativas y de investigación, campo en el que se ha asistido a una verdadera explosión de ámbitos privados (universidades, centros de estudios, institutos de investigación). Ellas vienen compitiendo con éxito con las universidades estatales y otras instituciones, desde los últimos años de la dictadura militar.

El resultado ha sido la formación de un inmenso conglomerado, homogéneo en sus lineamientos estratégicos, que abarca todos los grados del quehacer ideológico. Desde los niveles más refinados de elaboración hasta los más masivos de difusión. A los medios tradicionales (universidades, medios masivos) se añade una serie de organismos relativamente nuevos, por lo menos en su actual grado de influencia: encuestadoras de opinión pública, consultores económico/financieros, ciertos institutos privados. Todos consiguen un elevado e indisputado rango en la formación de información que luego accede a los canales masivos. El rasgo diferencial y novedoso, es la enorme capacidad de formación de opinión adquirida, con la consiguiente escasez de posibilidades en cuanto a la filtración de voces disidentes.

El grado de uniformación y disciplinamiento alcanzado, gana eficacia por estar dotado de la flexibilidad necesaria para mantener un fuerte grado de discrepancias y debates en la superficie. Queda, en cambio, intocado un “núcleo duro” de ideas que pasan a ser una verdad no sujeta a revisión. Se pro-

cura la instalación, con carácter de sentido común, de la vigencia inevitable de un sistema capitalista transnacionalizado, basado en la libertad de mercado. En paralelo al surgimiento de los “operadores” en los partidos, toman importancia los “comunicadores” oficiales en los medios masivos. Con idénticos vínculos con el poder económico que aquéllos, pero con una formidable continuidad en el contacto con la opinión pública, fijan los términos del debate, propician políticas públicas, erigen o derriban dirigentes.

Completando esta instauración de un núcleo de organizaciones y de profesionales de la ideología que interpelan a la sociedad civil desde una clara reproducción de la línea oficial, se ha generado una segunda línea de trincheras, que juega un rol auxiliar pero gravitante. Se trata de un sector intelectual afectado por un vasto proceso de transformación que asigna carácter definitivo a la “derrota”, y se “moderniza” integrándose al sistema. Ocupantes: de un espacio importante en los primeros años de democracia, la profundidad de la homogeneización por derecha les ha quitado capacidad de maniobra. Su influencia ha quedado recluida a circuitos limitados. IV. Situación actual y perspectivas

Se ha dicho que la Argentina es una sociedad “sin estado”. Esto halla asidero en la desaparición progresiva de las mediaciones, en su imposibilidad de generar una capacidad de dirección, tanto en relación con la clase dominante, como con la dominada.

El aparato estatal se mueve dificultosamente en un orden social desequilibrado con toda evidencia: el proceso económico/social de la Argentina ha respondido a un ciclo de “empeoramiento” permanente en las últimas décadas, al cual no ha sido ajeno, como es obvio, el decurso político/ideológico. A esto se suma la crisis del modelo de acumulación fordista y de las formas regulativas del Estado social keynesiano (14).

Las contradicciones en la sociedad argentina se acumulan unas sobre otras, sin resolverse, con progresivo efecto disolvente sobre el conjunto social. La precaria estabilidad social en su conjunto tiene una clave paradójica: lo sostenido y amplio del deterioro.

La crisis atraviesa al conjunto de las clases, al ámbito lico y al privado, a todas las representaciones, y a la ideología.

Un enfoque unilateral de esta generalización del deterioro, puede llevar a puntos de vista engañosos. Poner la mirada sólo en dirección a la descomposición del Estado, de los partidos y de los sindicatos burocratizados y al empobrecimiento de la ideología dominante puede arrastrar a una idea apocalíptica. No han faltado opiniones que presagien la ruptura total del sistema.

En otra dirección, destacar únicamente los grandes beneficios del núcleo hegemónico del capital, y la disgregación social e ideológica de los sectores que pudieran generar una alternativa, llevarían a la conclusión de una victoria definitiva del proceso de trasnacionalización y ajuste.

Consideramos más rico un enfoque matizado, que señale las serias brechas que presenta un proceso que puede ser presentado bajo una rostro tan bifronte como auténtico: para las clases dominantes, como un éxito completo desde el punto de vista del creciente volumen de ganancias y el amplio e indisputado manejo de la esfera pública por parte de un muy restringido núcleo. Para los sectores populares, como conjunto aberrante de frustraciones e injusticias que han deteriorado el nivel de vida y las aspiraciones la inmensa mayoría de la sociedad.

Ese mismo rostro bifronte presenta la explicación del sostenimiento de las formas democrático/constitucionales. Ellas se han sostenido hasta el momento en dos elementos básicos:

- a) Su alto grado de compatibilidad con los intereses de corto plazo del gran capital, y el no delineamiento de alternativas para el largo plazo. A ello se agregan factores institucionales más específicos, que hacen inviable un golpe militar en estilo clásico.
- b) La ausencia de posibilidades en cuanto a la conformación de alternativas con factibilidad de éxito. Esta ausencia permite el mantenimiento de niveles bajos de actividad de masas, y por lo tanto no existen niveles de cuestionamiento que pongan en primer plano a los aparatos represivos. Por otra parte, estos se hallan seriamente debilitados.

La organización democrática argentina queda así en un equilibrio “siniestro” cuyas posibilidades de perduración no pueden ser sino frágiles.

Pensamos que es pertinente, a esta altura, enunciar algunos rasgos del estado actual del proceso, junto con la proyección sobre su evolución en el futuro inmediato:

1. Los fenómenos político/ideológicos, en la Argentina actual, están signados, en gran medida, por la inorganicidad creciente de las clases sociales, tanto dominantes como subalternas. En ese cuadro, el Estado ha preservado una importante capacidad para dispersar y desorganizar a las clases subalternas. Ello no ha ido acompañado de una paralela capacidad organizadora sobre las clases dominantes. Hasta el momento, no logra dirigir a estas últimas en un sentido ordenado a la reproducción del sistema. Más aún, el sector hegemónico de la clase dominante lo recusa en la práctica, al no respetar acuerdos político/económicos, y al violar de modo masivo el ordenamiento legal. De hecho, la agudización de la crisis

—sólo mitigada ligeramente en los últimos dos años—, la desorganización generalizada de la sociedad, se convierten en mecanismos de extracción de excedentes para las clases dominantes, excedentes sobre cuyo reparto se generan, de modo simultáneo, fuertes enfrentamientos al interior de la misma. Los breves periodos hiperinflacionarios constituyen ejemplo cabal de este doble movimiento de ofensiva contra los dominados, acompañada de violenta confrontación intraburguesa.

2. El Estado no alcanza a definir acciones que le permitan ensanchar su base social más allá de unos límites muy estrechos. Sus políticas avanzan des-
embozadamente sobre los intereses de la amplia mayoría de la sociedad. Aún aquéllos sectores que debieran oficiar como “clases de apoyo” (profesionales, administración pública) son conscientes víctimas del proceso. Ello provoca una tendencia a la descomposición de la dirección política y de las burocracias públicas, que se autonomizan y chocan entre sí, privadas de una dirección eficaz.
3. El aparato estatal tiende a verse seriamente disminuido, incluso, en algunos de los rasgos que lo definen en cuanto tal. El ejercicio de la soberanía exterior, la legitimación para extraer y emplear recursos financieros, hasta su poder represivo, se ven en tela de juicio y se tornan inciertos en su funcionamiento.

El estado argentino ha abandonado las modalidades de regulación de tipo keynesiano, sin instaurar un nuevo modo de organización y funcionamiento que le asigne una capacidad de intervención sólida en las nuevas condiciones. En medio de su “retirada general” (desregulación, privatizaciones, supresión de sus roles sociales), el aparato estatal queda debilitado para la producción de acciones positivas. En los últimos años tiende a delinearse un programa de refuncionalización de orientación tecnoburocrática, pero la lógica real sigue siendo la de desmantelamiento a favor del capital local y acreedores externos.

4. La crisis por la que atraviesa la sociedad argentina encuentra su punto de partida y su fuente de reproducción en una crisis político/ideológica que la incapacita para desarrollar una acción efectiva tendiente a reinstaurar un nivel de estabilidad aceptable. Pese a ello, la supremacía ideológica de la clase dominante, y la disciplinada fidelidad que la inmensa mayoría de los “profesionales de la ideología” le profesan, siguen confiriendo un cierto margen de maniobra.
5. El conjunto del sistema de dominación sufre un proceso de tecnoburocratización. Tal como lo define Buci-Glucksmann, ésta es la “vía privilegiada de legitimación del estado por vía administrativa” (15). La

imposibilidad de instalar un consenso basado en la noción de representación, genera el intento de propagar una noción de “saber técnico” que sea apta para montar un mecanismo de deferencia. El modelo es el de una sociedad regida por “gerentes”, en el que la burocracia pública tienda a alcanzar altas pautas de eficiencia. La realidad, sin embargo, marca hasta ahora una oscilación entre la desordenada dependencia frente al gran capital y la anomia más completa.

6. Ante el exclusionismo de las decisiones estatales se trata de instalar un consenso en torno a un sistema de poder que tiene su vértice en el “gran capital”. Este genera la dirección en sus líneas estratégicas, cuya instrumentación de detalle queda a cargo de la línea tecnoburocrática de funcionarios permanentes que se aspira a crear. En ese esquema, la conducción política (presidente y un pequeño grupo de operadores, excluyendo al conjunto del partido de gobierno) queda encargado de compatibilizar y ordenar esas distintas lógicas.

La misión formulada para este “sistema de poder” es la de “readaptar” “reinsertar” “reordenar” a la sociedad civil y al Estado para encaminarlos en una dirección que se califica, en el discurso dominante, de dos maneras diferentes: como la única posible, sin opción; y como destinada a un futuro de prosperidad general. Estas formulaciones ideológicas van tomando fuerza desde los primeros años de la democracia, pero son elevadas a doctrina oficial de “pleno derecho” en el gobierno Menem. Queda abierto el camino para que la desvalorización de conjunto de las mediaciones políticas pase de ser una disfuncionalidad a superar, a constituirse en un rasgo propio del sistema -si es que lo resiste-. Incluso es susceptible de ser presentado como valioso.

7. De acuerdo al sistema descrito en el punto anterior, las formas de la democracia política, las elecciones y el sistema de partidos, quedan en un papel muy subordinado, en la periferia de la verdadera toma de decisiones. El gobierno Menem extrema y acelera las tendencias a la ruptura de organicidades y encuadramientos político-ideológicos y organizativos tradicionales. Toda la “arquitectura institucional” se ve cuestionada, es reducida a la inoperancia desde el aparato de Estado, sin que éste pueda construir su reemplazo.

En realidad, ciudadanía, parlamento y partidos, pasan a ser virtuales “disfuncionalidades”, que se toleran por razón de estar instaladas como una legitimidad de origen aceptable para la sociedad. Las instancias político/institucionales marginadas del sistema de poder real, entran en contradicción con éste al punto de ofrecerle resistencia activa. Se multiplican

los conflictos intraestatales (ejecutivo-parlamento, estado nacional-provincias, etc), que podrían servir de base a un proceso de virtual desintegración. La subordinación y manipulación creciente del aparato judicial es otro ejemplo claro de este proceso.

8. La falta de alternativas visibles para la clase subalterna, juega como principal mecanismo ideológico de este sistema de dominación. La evidencia del exclusionismo estatal, hace que ya no pueda cobijarse bajo el manto del “interés general”, y lo deja remitido a legitimaciones negativas. Estas van desde el conformismo desesperanzado, hasta la adaptación canica. En la última etapa del gobierno Alfonsín, y acentuadamente, bajo el de Menem, el mismo Estado proclama la lejanía de la posible reversión de la crisis, que aparece como una catástrofe con difusos responsables. Frente a ello, la reconversión del capital es presentada como el único camino posible. El conjunto adquiere amplia verosimilitud, a partir tanto de la coyuntura nacional como internacional. Todo tiende a generar y reforzar una actitud de resignación y adaptación pasiva por parte de las clases subalternas.
9. Como resultado de factores enunciados en los puntos anteriores, el Estado y el sistema político aparecen cruzados por contradicciones múltiples, que no pueden siquiera atenuar. Puede decirse que son atacados simultáneamente “desde arriba” por los propios dominadores, y deben en gran parte su estabilidad a la escasa capacidad que por el momento existe para un ataque “desde abajo”. De ese modo se prolonga ese “equilibrio siniestro” que mencionamos anteriormente. El éxito, dentro de su lógica, de las políticas económicas recientes, no genera una paralela mejoría en la dimensión política.
10. En medio de la referida multiplicidad de contradicciones, la gestión menemista del Estado, y su actuación como tendencia política, aparecen como expresión brutal de las rupturas de la sociedad civil y el Estado. Representante vicario, e improvisado en gran medida, de la realización completa del programa del núcleo de las clases dominantes, Menem acomete su tarea histórica en condiciones que equivalen a la descomposición progresiva y conjunta de Estado y sociedad civil. Ha quedado compuesto, desde mayo de 1989 -con el triunfo electoral de Menem-, un núcleo de dirección en el que se conjugan parte de los intelectuales de la clase dominante, con los jirones de la transición inconclusa hacia un nuevo estadio, de un sistema de partidos agotado en sus contenidos originales.
11. Sin revertir el cuadro de ofensiva de la clase dominante, se tienden a generar mecanismos de resistencia. Estos, localizados y parciales, limitados a reivindicaciones específicas, adolecen de rasgos que los debilitan en lo

inmediato, pero podrían potenciarlos en el mediano plazo. En efecto, la ruptura de los lazos político-ideológicos con el reformismo, les confieren cierta desorientación que pudiera dejar paso a alguna nueva acumulación política. Sin embargo, la brutal reorganización-desorganización del conjunto de condiciones de reproducción de su vida, tanto “material” como “ideal”, que han sufrido las clases populares, obliga a ser prudentes sobre las posibilidades de rapidez y profundidad de esa acumulación.

Para terminar, si intentáramos un telegráfico balance del cumplimiento de las que enunciamos como dos tareas básicas del sistema, sería pertinente decir que el período Menem ha estado signado por la desordenada realización de gran parte de la primera (reformulación del aparato del Estado), condicionada en gran medida por la falta de una comprensión cabal de sus objetivos estratégicos de fondo. La percepción suele ser sólo economicista, bajo el signo del “negocio” para el capital privado, y la reducción del déficit público para el Estado.

En cuanto a la segunda (conformación de un Sistema político estable), basta una mirada a la estructura de poder menemista. Las virtudes de coherencia y eficacia tecnocrática del equipo Cavallo, no alcanzan a contener al resto del aparato estatal, y la amortiguación de algunos aspectos de la crisis económica, no ha mejorado sensiblemente el funcionamiento político del modelo.

Signada por la incapacidad de “administrar” siquiera las contradicciones, el gobierno de Menem es un producto acabado de un sistema político marcado por la vulnerabilidad. Los comportamientos manifiestamente ilegítimos de quienes ejercen el gobierno y la acelerada licuación que imprime a todas las mediaciones son el resumen de la falta de avance en cuanto a conferir legitimidad y continuidad a la conducción del Estado.

NOTAS

- (1) Para una visión más acabada de este tema véase HOLLOWAY, JOHN y SOL PICCIOTTO: “Capital, Crisis y Estado”, Estudios Políticos, Nros 2 y 3, México, 1984.
- (2) Designamos a la clase dominante en singular porque pensamos que la relación fundamental que se presenta en la sociedad capitalista es la que se da entre el capital y el trabajo, tomados ambos de manera global. En este sentido, el despliegue de la lógica del sistema capitalista se encuentra en función del capital como relación social global. Esto no implica, sin embargo, que la mediación política entre el capital, el Estado y el trabajo tenga necesariamente una expresión unificada. Antes bien, en su proceso de ajus-

te continuo -debido, precisamente, a la imposibilidad de ocultar de una vez y para siempre la realidad de la explotación que se manifiesta de manera cotidiana al trabajador, y a la necesidad permanente de aumentar los beneficios- el despliegue del capital sacrifica constantemente a capitalistas individuales. La selectividad del ajuste genera oposición al interior del núcleo de capitalistas particulares que componen una sociedad determinada, dado que ninguno quiere ser el “mártir” que permita la reproducción del sistema en su conjunto

- (3) no reseñaremos aquí los rasgos de esa remodelación, lo que ya se ha realizado con eficacia. Un buen tratamiento de las líneas principales de la remodelación de la sociedad, se encuentra, por ejemplo, en VASCONI, TOMAS: *Clases dominantes y aparato estatal*, Centro de Estudios sobre América, La Habana, 1989; y en SCHVARZER, J. y SIDICARO H.: “Empresarios y Estado en la reconstrucción de la democracia en la Argentina”, en “El Bimestre”, Nro. 3S, Buenos Aires, 1987.
- (4) A pesar de las múltiples manifestaciones de rebeldía, condensadas fundamentalmente, en la ocupación de instalaciones militares por los grupos denominados “cara pintadas” -fuertemente vinculados a la “guerra sucia” y al experimento de Malvinas, éstas fueron tomadas por la sociedad civil y por el poder político como marginales, no deseadas e incluso reprobables. La jerarquía militar, que en su silencio ocultaba una cierta simpatía con estos movimientos, comprobó entonces que los tiempos en que sus “aventuras” gozaban de una legitimidad nada desdeñable habían quedado atrás, aunque sea de momento, por lo que transformó sus inconformidades en reivindicaciones de tipo gremial.
- (5) Respecto de los mecanismos de dominación ideológica que escapan a un encuadramiento como “consenso” o “consentimiento”, del tipo del miedo o la resignación, se halla una conceptualización y topología en THERBORN, GORAN, *La ideología del poder y el poder de la Ideología*, cap. 5, “Ideología y poder político”, Págs. 74 y ss, Siglo XXI, Bs. As, 1988
- (6) EVERS, TILMAN, “El Estado en la periferia capitalista”, Buenos Aires, Siglo XXI. Cabe destacar que la distinción entre capital interno y externo es sólo analítica. Es ya de sentido común percibir que el capital fluye buscando oportunidades de reproducción sin reparar en naciones ni banderas. La distinción tiene sentido sólo en la medida en que resulta necesario comprender el movimiento del capital en un espacio dividido en naciones, pero carece del mismo si se pretende con ello aludir a la existencia de lógicas determinadas por el espacio en que la acumulación se hizo posible

- (7) Nos referimos con ello al gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) Igualmente, se utilizará el nombre de menemismo para hacer mención al gobierno de Carlos Menem (1989-a la fecha)
- (8) En febrero de 1989, los grupos más concentrados del capital lanzaron una ofensiva en contra de una política económica -el Plan Primavera- que privilegiaba, a su entender, la transferencia neta de recursos a los organismos multilaterales de crédito antes que a la reproducción de los privilegios acumulados por dichos actores a partir de la dictadura Como consecuencia del programa económico, la promesa de una transferencia neta de recursos estatales a la actividad interna se fue acumulando en la forma de una deuda interna “impagable” por parte del gobierno. Ante esta perspectiva, los principales grupos económicos abandonaron sus tenencias de activos gubernamentales y presionaron sobre el mercado de cambios hasta hacer estallar el Plan Primavera
- (9) Al iniciar su gobierno, Menem decide nombrar ministro de economía a un importante ejecutivo de la firma Bunge y Born. Dicha compañía constituye uno de los imperios económicos -con una presencia preponderante en la industria agrícola, petroquímica, inmobiliaria, etc- más importantes que operan en la Argentina. La disolución de las mediaciones políticas que o en este caso, acentuada por la clara vocación anti-peronista (esto es contrario al partido que llevó a Menem al poder) manifestada desde la constitución de ese movimiento político sostenido por la mencionada empresa.
- (10) Esto suele alcanzar extremos en que el Estado desaparece como (interlocutor en las negociaciones, y la normativa es producida directamente por los representantes empresarios. Para las líneas generales de esta confusión y sus tendencias, hay referencias en OSTIGUY, PIERRE: Los capitanes de la Industria, Bs. As., Legasa, 1990.
- (11) Citado en OSTIGUY, PIERRE, op. cit.
- (12) El “Plan austral” constituyó el primer esfuerzo sistemático del Gobierno de Raúl Alfonsín por estabilizar una economía que había alcanzado la hiperinflación. El Plan consistió, fundamentalmente, en un cambio del signo monetario, el congelamiento de precios y salarios y la reducción de la deuda interna pública del gobierno El congelamiento de precios y la reducción de la deuda fueron ampliamente compensados a los grandes grupos empresariales, a través de transferencias indirectas.
- (13) Cabe destacar que en la Argentina una buena parte de los medios de masivos de comunicación -fundamentalmente radio y televisión- formaban parte del patrimonio estatal desde los años setenta.

- (14) Para una visión más completa de este último proceso véase ARZUAGA MAGNONI, JAVIER: “Globalización, Reforma del Estado y Empresarios”, *Convergencia, Revista de Ciencias Sociales*, Nro 4, México, 1993.
- (15) La autora ubica el proceso de tecnoburocratización como un rasgo básico de la moderna crisis del Estado, una faceta de la pérdida de importancia de los mecanismos parlamentarios. BUCI-GLUCKSMANN, CHRISTINE, “Sobre el concepto de crisis del Estado y su historia”, en Varios Autores: *La crisis del Estado*, Fontanella, Barcelona, 1977.